

## El Otro Lado del Conocimiento Oficial: Control y Experticia en la Gobernanza Ambiental Neoliberal

*The Other Side of Official Knowledge: Control and Expertise in Neoliberal Environmental Governance*

Piergiorgio Di Giminiani<sup>i</sup>

### RESUMEN

Basado en la observación etnográfica de la relación entre pequeños agricultores y funcionarios estatales, este artículo nos muestra cómo las acciones institucionales de transferencia de conocimiento oficial generan prácticas de monitoreo y control mediante las cuales tanto el conocimiento ambiental local como las acciones de los actores estatales se ven marginalizados a favor de la implementación de modelos legales para el uso de recursos naturales. La aplicación de un modelo de conocimiento oficial, basado en los mecanismos de auditoría, constituye una solución gubernamental a la reestructuración de la intervención estatal bajo el neoliberalismo, el que apunta a favorecer la inclusión de los pequeños agricultores en el mercado global, conforme al principio de responsabilidad individual y la consecuente reducción financiera e ideológica de políticas sociales colectivas.

Palabras clave: *Gobernanza Medioambiental, Neoliberalismo, Cultura de Auditoría, Agricultura, Paisaje.*

### ABSTRACT

Based on ethnographic research among small landholders and state officials, this article shows that the institutional production and transference of official knowledge engender practices of monitoring and control through which local environmental knowledge and state actors' actions are marginalized and the implementation of legal models of natural resource use is made effective. The implementation of a knowledge model based on audit mechanisms constitute a governmental solution to the restructuring of statecraft under neoliberalism, which aims at favoring the inclusion of small landholders within the global market in accordance with the principle of individual accountability and the consequent financial and ideological contraction of collective social policies.

Key words: *Environmental Governance, Neoliberalism, Audit Culture, Farming, Landscape.*

---

<sup>i</sup> Escuela de Antropología. Pontificia Universidad Católica de Chile. Correo-e: pdigiminia@uc.cl

## INTRODUCCIÓN

En 2013 se dio curso al proyecto de investigación sobre uso y conservación de áreas forestales en un sector cordillerano del sur de Chile, que aún sigue vigente y en el cual se enmarca este artículo. Desde los primeros días en terreno, los principales interlocutores han sido los campesinos de un sector rural de la comuna de Pucón y los funcionarios de la CONAF (Corporación Nacional Forestal), con quienes se mantuvo largas conversaciones y entrevistas acerca de los desafíos de la pequeña agrosilvicultura. La gran pregunta durante estos encuentros era cómo poder repensar la conservación en tanto proceso socialmente incluyente. En este sector del sur de Chile, como en muchas otras áreas forestales alrededor del mundo, la conservación siempre ha generado controversias, ya que su impacto frecuentemente consiste en la imposición de restricciones a los habitantes locales, las que terminan contribuyendo a su marginalización socioeconómica (véase Peluso 1994; Agrawal 2005; Campbell 2005). Al compartir esta pregunta con los interlocutores, emergió como tema central de las entrevistas el rol clave que cumple la “extensión” al favorecer técnicas más efectivas, económica y ecológicamente sustentables, de extracción forestal entre los pequeños agricultores. “Extensión” se refiere a aquellas actividades de transferencia de conocimiento técnico desde un grupo de personas designadas como expertas, en este caso los “extensionistas” contratados por la CONAF, a otro grupo compuesto por productores que supuestamente carecen de éste. Sin embargo, transcurridos varios meses después de las primeras conversaciones, empezó a delinearse una imagen de la relación entre funcionarios y campesinos que difícilmente puede ser enmarcada en el escenario típico del conocimiento experto. Distintas acciones institucionales de manejo sustentable de recursos forestales encontraban estrategias encubiertas de resistencia y adaptación. Aún más evidente resultaban las ambivalencias de los mismos actores estatales y nogubernamentales al aplicar modelos de extracción y conservación de recursos naturales que difícilmente se ajustaban a las preocupaciones y necesidades de los residentes locales. El caso de la extensión forestal, gestionada principalmente por la institución pública CONAF, muestra con claridad las ambigüedades de la aplicación del conocimiento oficial, en tanto

marco conceptual estructurado alrededor de un tipo ideal de sujeto caracterizado por racionalidades de mercado ajenas a muchos de los contextos rurales del sur de Chile. Sin embargo, cuando hablamos de las contradicciones del conocimiento ambiental oficial, no quiere decir que no reconozcamos el profundo impacto de procesos gubernamentales, en apariencia neutrales, como la extensión forestal. Por el contrario, un análisis micropolítico de la relación triádica entre funcionarios públicos, campesinos y marco institucional, demuestra que el conocimiento oficial puede relevarse como una instancia efectiva de cartografía socioecológica que, en última instancia, produciría mecanismos de control hacia los sujetos de las políticas ambientales, así como a sus implementadores.

Con más de doce meses de investigación etnográfica con residentes rurales auto-identificados como colonos, y con funcionarios estatales, este artículo ofrece un análisis de ciertos efectos de los programas de manejo de recursos naturales entre la población campesina. En cualquier caso de transferencia de conocimiento oficial, es fácil verse tentado a interpretar ésta como un fenómeno que acarrea la inevitable formación de un sujeto ambiental uniforme, es decir, un tipo ideal de persona cuya comprensión de sí misma y sus acciones son resultado de discursos dominantes sobre el medio ambiente (Agrawal 2005). No obstante, mi estudio indica que el conocimiento ecológico oficial está abierto a contestación tanto por los agricultores como por los actores estatales, volviendo la formación de sujetos ambientales consistentes con los principios y objetivos de las políticas estatales un objetivo ideal más que un resultado observable (Mathews 2011). Sin embargo, esta observación no debe ser leída como un intento por quitarle énfasis a la extensión del poder estatal, puesto que, como se verá más adelante, el impacto de la gobernanza ambiental en agricultores y actores estatales toma forma en la implementación de nuevas redes de mecanismos de auditoría (Gledhill 2004; Kipnis 2008; Power 1997; Strathern 2000). Los programas de transferencia medioambiental en el sur de Chile marginalizan el contenido del conocimiento ecológico, tanto de funcionarios estatales como de agricultores, al traducirlos en tareas y definiciones establecidas por marcos reguladores abstractos. En última instancia, el análisis etnográfico demostrará

la reconfiguración de la acción estatal como un conjunto de tecnologías de monitoreo y control diseñadas como respuesta a una reconfiguración neoliberal de la acción gubernamental, caracterizada por un financiamiento insuficiente a las instituciones especializadas en pequeña agricultura, escasez de personal y falta de políticas comunitarias y participativas para la planificación de recursos ambientales. En lugar de representar una fuente de soluciones para las crecientes crisis de la pequeña agricultura, el Estado viene a ser imaginado por los mismos agricultores como una fuente adicional de ansiedades e incertidumbres respecto de la creciente precariedad de la agrosilvicultura a pequeña escala.

## NEOLIBERALISMO Y GOBERNANZA AMBIENTAL EN CHILE

El término neoliberalismo indica un conjunto de ideas y prácticas que se aglutinaron alrededor de la década de 1960 como una crítica levantada, por un grupo internacional de auto-proclamados economistas liberales, contra los principios keynesianos de regulación del mercado, y a favor de una mayor presencia de la iniciativa privada en la esfera pública (Harvey 2007: 20). El neoliberalismo puede ser definido como un conjunto de racionalidades y prácticas de gobernanza, y a su vez como un discurso global sobre la individualidad. Como primero señaló Foucault (2008), el neoliberalismo no es sólo una agenda económica, sino también un entendimiento de la individualidad a través de un énfasis en la auto-disciplina y auto-realización. La confianza en la desregulación del mercado está fuertemente relacionada a “una promoción de la libertad como medio de la autorrealización que desestima cualquier cuestionamiento de las condiciones socio-económicas que hacen esa libertad posible” (Hilgers 2011: 352). Como sugiere Rose, “las estrategias liberales de gobierno se convierten de este modo dependientes de dispositivos [...] que prometen crear individuos que no necesitan ser gobernados por otros, pero que se gobernarán a sí mismos, dominarán a sí mismos, cuidarán a sí mismos” (2006: 150). La investigación antropológica sobre el neoliberalismo ha mostrado como los aspectos globales de esta ideología son necesariamente reconfigurados localmente en base a discursos y prácticas existentes relativos al concepto de persona,

sociedad, y medio ambiente (Comaroff y Comaroff 2009; Ferguson 2010; Gershon 2011; Hilgers 2011; Ong 2006; Povinelli 2011). La ideología neoliberal, por ende, no existe en tanto un conjunto de principios teóricos fundantes, ya que nunca ha sido construida en base a eje filosóficos centrales. Más bien, esta ideología es reactualizada constantemente en procesos socio-económicos inspirados a principios generales, como aquellos de auto-realización y control, mencionados anteriormente. Esta reactualización implica tanto interiorizaciones como contradicciones y abiertas resistencias. Este es el caso de la gobernanza ambiental, término que se refiere a la gestión y administración del medio de los recursos naturales. La gobernanza ambiental es un término amplio en cuanto puede referirse tanto a grandes planos energéticos como a los programas de extensión dirigidos a pequeños agricultores, que son el centro de mi análisis. Como veremos, los principios neoliberales, tanto respecto a la mercantilización de los recursos naturales como a las ideas de ciudadanía, permean la intervención ambiental del Estado en Chile.

La historia de la gobernanza medioambiental en Chile se caracteriza en gran medida por las consecuencias de la neoliberalización del sector primario en las últimas cuatro décadas. Este proceso es parte de profundas reestructuraciones al sistema económico chileno establecidas por la junta militar dirigida por Augusto Pinochet (1973-1990). Dichas reformas económicas fueron diseñadas por un grupo de economistas conocidos como los “Chicago boys”, e implantadas con el objetivo de promover la reducción del control estatal sobre las iniciativas privadas (Cárcamo-Huechante 2006; Silva 1991). Mientras que los partidarios de la junta militar celebraban el “milagro chileno”, expresión acuñada por Milton Friedman para describir el crecimiento de la economía chilena durante los primeros años de dictadura, la neoliberalización de la producción económica produjo crisis económicas cíclicas durante la década de 1980, una creciente desigualdad en los ingresos y, consecuentemente, la marginalización de grandes sectores de la población chilena. El impacto de las distintas reformas de los años ‘70 y ‘80 es ejemplificado por los radicales cambios económicos y ambientales traídos por la expansión de la industria transnacional agrícola (Gwynne y Ortiz, 1997), viéndose particularmente afectado el sector forestal. Para apreciar el profundo

impacto de estas reformas, vale la pena presentar una breve historia del mercado forestal en Chile.

El origen de la silvicultura comercial data del 1940, cuando el gobierno del Frente Popular (1938-1952) implementó un programa nacional de modernización, cuyo objetivo era apadrinar la silvicultura científica y la exportación transnacional de madera (Klubock, 2014). En periodos anteriores, la silvicultura era un actividad secundaria enormemente desregulada, con excepción de unas pocas medidas introducidas por el Decreto 4363 de 1931, como por ejemplo la exención de impuestos a la replantación (Camus, 2006:168). En 1950, bajo la dirección de la agencia estatal CORFO (Corporación de Fomento de la Producción de Chile), fueron introducidos subsidios y esquemas de crédito para estimular la tala comercial. La modernización de la silvicultura se prolonga durante el gobierno socialista de la Unidad Popular (1970-73), que instituye complejos de silvicultura administrados centralmente con participación de pequeños propietarios (Klubock, 2004: 346). En ese momento, la intervención estatal en la silvicultura era parte de un proceso más amplio de reforma agraria, que apuntaba a contrarrestar las grandes desigualdades causadas por el sistema de *latifundios*.

La expansión de la silvicultura comercial entre 1940 y 1970 trajo consigo un impacto ecológico negativo, anticipándolos futuros desplazamientos de agricultores desde las áreas con alta concentración de plantaciones madereras hacia los centros urbanos. Sin embargo, los daños ecológicos y sociales causados por la extracción forestal fueron exacerbados tras el comienzo de la dictadura (Klubock 2014). En 1974, el decreto ley 701 estableció mecanismos para la adquisición de tierras fiscales, y su conversión en plantaciones madereras (Clapp 1995: 281). Las medidas introducidas por dicho decreto fueron capitalizadas por un puñado de *forestales*, que prosperaron en torno a la exportación de madera de especies no nativas<sup>1</sup>. Paradójicamente, para los defensores del neoliberalismo la intervención estatal fue necesaria, sobre todo para la desregulación del mercado forestal. La expansión de las compañías madereras causó un rápido declive en la competitividad entre los pequeños propietarios, así como degradación ambiental y precarización del trabajo, ya que el número de temporeros se vio aumentado sostenidamente desde 1980 (Kay 2002: 481). El regreso a la democracia en 1990 no trajo

cambios substanciales en la industria forestal. Las políticas agrícolas aún se enmarcan por una intención fuertemente facilitadora del mercado, en lugar de una más bien reguladora (Tecklinet *al.* 2011). En el caso de la silvicultura, el decreto ley 701, cuya modificación es acaloradamente debatida en la arena política chilena, se mantiene todavía como el marco legal principal que dirige la acción estatal. Las actividades de las empresas forestales transnacionales continúan siendo objeto de controversia en el Chile actual, puesto que sus plantaciones madereras se encuentran ubicadas en tierras mapuches expropiadas históricamente a dicho pueblo originario, lo que se suma a acusaciones por parte de activistas medioambientales sobre la responsabilidad de la degradación del suelo y pérdida de agua (Di Giminiani 2013, 2015a y 2015b). La migración rural hacia los sectores urbanos es particularmente severa en áreas especializadas en silvicultura comercial, debido a los bajos niveles de trabajo requeridos por las plantaciones madereras (Clapp 1995).

A pesar de las continuidades en el modelo extractivo entre la época dictatorial y los gobiernos democráticos, las últimas dos décadas han coincidido con las primeras instancias de activismo medioambiental para la conservación de áreas silvestres (Henney Gabrielson 2012). De igual forma, los gobiernos democráticos de los últimos veinte años han actuado activamente respondiendo a la degradación ambiental y a la precariedad de la agricultura de pequeña escala, insertando algunas reformas legales. En 1998, el decreto ley 701 se modifica para que los pequeños productores puedan ser incluidos en los programas de transferencia de tecnología, extensión y reforestación<sup>2</sup>. En el 2008, tras más de una década de debates parlamentarios (Clapp 1998), la *Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal* es finalmente aprobada por el senado chileno. Mientras que la introducción de la ley de bosque nativo fue saludada como un evento sin precedentes en la historia medioambiental del país, su implementación ha tenido poco impacto en relación con la deforestación y la agro-silvicultura a pequeña escala. Un ejemplo de aquello es que, entre 2008 y 2011, sólo el 3% de las postulaciones de los propietarios de tierras a “programas de reforestación y manejo de bosque” fueron exitosas, y el porcentaje sería aún menor si hablamos de pequeños propietarios (Neira y Rivas 2013).

Mientras que la deforestación de áreas silvestres nativas parece haber disminuido, la degradación ambiental y la precariedad de la pequeña silvicultura siguen siendo hechos preocupantes en muchos sectores rurales. Una de las razones principales para la continuidad de ambos fenómenos, es una dicotomía histórica de la intervención estatal, caracterizada por el apoyo a la industria forestal mediante políticas de fomento en ciertos sectores geográficos, y a la implementación de estrategias de conservación en sectores con una alta concentración de especies endógenas, como lo son los parques nacionales (Pauchard y Villaroel 2002). Ambas tendencias tienden a ser socialmente excluyentes para los pequeños propietarios, que por un lado se ven en una posición marginal en el mercado forestal capitalizado por las grandes empresas forestales, y por otro son sujetos a limitaciones muy estrictas respecto a sus actividades forestales, debido a la concentración de la pequeña silvicultura en sectores caracterizados por la presencia de bosques nativos y por una menor tasa de deforestación. Como podremos ver en la próxima sección, la intervención estatal relacionada al manejo de recursos forestales entre pequeños agricultores se caracteriza por los intentos realizados por miembros de diversas instituciones medioambientales de reconciliar las políticas industriales y de conservación.

#### ENTRE LEY Y CONOCIMIENTO ECOLÓGICO: LOS DILEMAS DE LOS FUNCIONARIOS FORESTALES

En Chile, las políticas forestales son implementadas casi enteramente por la CONAF, una entidad que depende del Ministerio de Agricultura, financiada fuertemente por fondos privados, y que fue fundada en 1973 con el objetivo de contribuir a la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales del país mediante la redistribución de terrenos forestales entre pequeños propietarios (Klubock 2004: 346). Hoy, el rol de CONAF es complementado por el Instituto Forestal de Chile, una agencia estatal con mayor influencia, que ha establecido lazos estrechos de colaboración con la industria forestal en los últimos cuarenta años (Silva 1997: 470). En un sentido amplio, el objetivo de CONAF es “*contribuir al manejo sustentable de bosques nativos, formaciones xerófitas y plantaciones*

*de madera a través de las acciones de promoción industrial, monitoreo de legislación forestal, protección de los recursos de vegetación y conservación de la biodiversidad en beneficio de la sociedad*”<sup>23</sup>. En terreno, sus funcionarios están involucrados directamente en la administración de parques nacionales, y en la supervisión de planes de replantación y manejo de bosques.

Durante mi investigación, tuve la posibilidad de entrevistar a varios funcionarios que estaban ejerciendo sus labores alrededor de mi área de estudio. Para la mayoría de ellos, la decisión de pertenecer a CONAF representa una alternativa ética a la ruta más común y lucrativa de empleo en compañías madereras transnacionales. Durante nuestros encuentros, un tópico recurrente era la crítica al rango de acción limitado de la institución, causado principalmente por la falta de personal y financiamiento. Otra objeción concernía la inclinación de la CONAF hacia el fomento forestal, un punto evidentemente en pugna con las aprensiones sobre la degradación medioambiental en Chile, compartidas por muchos funcionarios. Una actividad primaria para los funcionarios de la CONAF es la ejecución de programas de extensión con pequeños propietarios. La extensión puede ser definida como un conjunto de servicios de asesoría, provistos por agencias estatales y no gubernamentales, cuyo enfoque es informar a los agricultores sobre el manejo de los recursos naturales. En el caso de CONAF, sus actividades de extensión corresponden a la ejecución de planes de manejo simple y de manejo complejo. Los primeros se refieren a la autorización oficial de tala para la extracción de un número pequeño de árboles. Los segundos consisten en un plan de extracción selectiva de árboles acordada con el propietario de la tierra, que puede durar desde unos pocos meses hasta cinco años conforme a las regulaciones de CONAF. A diferencia de los planes de manejo simple, los planes complejos requieren de la supervisión de un extensionista.

Para gran parte de los funcionarios entrevistados, el mayor desafío a la hora de empezar un plan de manejo forestal era la negociación con los agricultores en relación a los límites de la tala. Efectivamente, un plan de manejo puede ser acordado solamente una vez que los agricultores se encuentran convencidos de los beneficios a largo plazo de ellos, aceptando delimitar sus aspiraciones.

Para la mayoría de los funcionarios, los agricultores que participan de los programas de extensión de CONAF están lejos de desconocer el impacto de sus actividades hacia el ciclo regenerador del bosque. Uno de ellos, Felipe, me explicó una vez que los agricultores saben mucho de los ciclos del bosque y estrategias de raleo, a pesar de que ignoren el funcionamiento interno del manejo forestal<sup>4</sup>. “Más que de cualquier otra cosa, mi trabajo es llevar cosas prácticas que ellos llevan haciendo desde siempre y convertirlas en algo sobre él papel, algo más legal”, me señaló. Como indicaba Felipe, las mediaciones de los funcionarios entre necesidades humanas y ciclos forestales incluyen de este modo un tercer factor: las fronteras legales de la extracción legítima.

Las previsiones de los extensionistas respecto al impacto de una actividad de extracción forestal no son simplemente el resultado de análisis individuales, sino que se adaptan a definiciones vinculantes de lo que es “bosque”, derivadas de los marcos legales existentes. El principio de propiedad constituye la premisa de todas las definiciones de bosque empleadas en los planes de manejo forestal. Un *bosque* es definido como un área boscosa de la que es dueño exclusivamente un propietario. Consecuentemente, las propiedades de tierra boscosa que han sido heredadas por más de una persona y no han sido divididas legalmente entre los herederos (*sanada*) están excluidas de los programas de extensión. Otra definición significativa concierne a la intervención humana en los bosques, la que está esencialmente restringida a las actividades de tala. Una definición tan restrictiva excluye la posibilidad de reconocer las actividades agrícolas llevadas a cabo en proximidad de las áreas forestales, tanto por los dueños como por sus vecinos, quienes pueden jugar un rol significativo en el ciclo del bosque. Este es el caso de la ganadería, que constituye una gran amenaza a la regeneración del bosque, ya que el ganado suele pastar los árboles jóvenes.

Como hemos visto hasta ahora, la experticia de los funcionarios forestales difícilmente puede ser enmarcada en el escenario de la “cultura experta”, un fenómeno global caracterizado por la habilidad de los así llamados expertos en establecer espacios institucionales dentro de los cuales su autoridad es incuestionable (Rose 2006). Más bien, la experticia de los funcionarios forestales consiste en un conjunto

de prácticas concretas de mediación entre marcos legales y ecológicos de interpretación de uso de bosque, dada la falta de reconocimiento, por parte de los agricultores, de los funcionarios como expertos. Como resultado, el conocimiento ecológico de los funcionarios junto a su compromiso hacia la conservación y sustentabilidad son marginales en comparación con su implementación estricta de marcos legales estandarizados regulando el uso de bosque. Otra razón para la marginación del conocimiento de los funcionarios puede ser encontrada en la incorporación de sus acciones en sistemas complejos de auditoría y verificación. Esto es particularmente evidente en el caso de los *extensionistas*, quienes suelen ser empleados por CONAF por medio de un sistema de subcontratación. Para ellos las condiciones laborales, en particular en relación con la renovación de contratos, dependen en gran medida de las *metas* e *indicadores* de performance laborales. Entre las distintas tareas asignadas a los oficiales de extensión por la CONAF, la supervisión de *proyectos* –término muy común en Chile referente a cualquier iniciativa patrocinada por el Estado a través de competencias abiertas– es un aspecto fundamental de su evaluación. Ya que los agricultores son considerados responsables de la implementación de los planes de manejo de bosques, los extensionistas son evaluados principalmente conforme al número de agricultores que reclutan. En consecuencia, los funcionarios son presionados para contratar el mayor número de planes posible, más que para velar por sus efectivas implementaciones. Como lo expresó claramente Juan, uno de los funcionarios entrevistados de más experiencia, “a veces estamos más preocupados de nuestros objetivos y no podemos pensar en alternativas que involucren a los agricultores, respeten su conocimiento y los hagan sentir empoderados”.

Las experiencias de funcionarios estatales revelan algunas características más amplias de la cultura de auditoría. Numerosos autores han mostrado el potencial de la cultura de auditoría para promover acciones de autorregulación que socavan la agencia de empleados y funcionarios (Kipnis 2008; Power 1997; Strathern 2000). Como propone Gledhill, este fenómeno está,

...profundamente arraigado en las agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales, lo que lleva a un sistema de

*evaluación de los proyectos en los que lo que se evalúa es realmente la eficacia procesal de la acción en cuanto a la misión de la agencia, y no su impacto sustantivo en la vida de los seres humanos (2004: 341).*

La creciente reestructuración de la gobernanza mediante los principios de la auditoría es funcional a la introducción de racionalidades financieras dentro de la acción estatal, un punto fundamental del neoliberalismo, como veremos más adelante en este artículo. Las experiencias de funcionarios estatales que he entrevistado indican que el énfasis en la responsabilidad personal y la verificación inherente a los planes de manejo de bosque empujan el contenido, como las implicancias políticas de las acciones estatales, a una posición marginal. También sugieren que cualquier caracterización de una institución ambiental como un cuerpo coherente de prácticas no puede asir las incongruencias del conocimiento oficial. Reconocer estas discrepancias pone a los actores estatales en un escenario complejo, en que sus acciones no pueden ser reducidas a meras reiteraciones de discursos oficiales. Los burócratas en general, pueden acatar estrictamente los códigos legales por diferentes razones, por ejemplo, para reducir su responsabilidad individual mientras violan las reglas para expresar una declaración de disenso con las ideologías de gobierno, o simplemente para relacionarse de forma empática o instrumentalmente con sus clientes (Gupta 1995). De acuerdo al argumento de Mathews (2011: 229), el conocimiento oficial no es el resultado ni de la internalización de discursos oficiales ni de los proyectos burocráticos comprensivos de legibilidad; un punto señalado por Scott en su análisis del desciframiento estatal de fenómenos sociales en marcos de estandarización (1998). La gobernanza ambiental se despliega en terreno mediante el entrelazamiento y ocultamiento de conocimiento oficial por parte de los actores estatales, lo que efectivamente evita la estabilización de la regulación de la silvicultura (Mathews 2008: 486). En Chile, los programas de extensión agrícola son legitimados por los legisladores, como una transferencia neutral de conocimiento oficial de expertos a agricultores. Sin embargo, estos son implementados en terreno a través de distintas tecnologías de control sobre las prácticas de los funcionarios estatales. Un escenario similar ocurre en las negociaciones de los

agricultores, y en su resistencia y/o acatamiento de los principios de los planes de manejo de bosque.

## EL CONOCIMIENTO OFICIAL EN TERRENO: LAS EXPERIENCIAS DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES

En el sur de Chile, la gobernanza forestal involucra un amplio rango de propietarios de tierra, desde multimillonarias compañías forestales a agricultores mapuches, que se ven afectados por una falta histórica de tierra causada por procesos de despojo colonial. Una porción significativa de las personas involucradas en programas forestales estatales está compuesta por “colonos nacionales”, cuyas propiedades se encuentran ubicadas principalmente en áreas cordilleranas. Esta categoría ha surgido como consecuencia histórica de la expansión de los colonos en el siglo XIX, cuando la población mapuche fue desposeída de su tierra a través de una campaña militar de treinta años del ejército chileno (1860-83), siendo confinada a reducciones (Bengoa 2014). La mayor parte de la tierra declarada fiscal, en base al principio legal de la *terra nullius*, fue redistribuida a colonos a través de subastas públicas y concesiones a compañías de colonización (Correa et al. 2005). La falta de mecanismos reguladores llevó a que la mayor parte de los terrenos licitados se concentrara en manos de unos pocos colonos europeos, viéndose esto reflejado en la creación de enormes fundos, algunos con extensiones superiores a 5000 hectáreas. Más tarde, en el proceso de colonización, las extensiones de tierra menos atractivas, como áreas boscosas y montañosas, se volvieron sujetas a flujos migratorios de campesinos provenientes de otras regiones chilenas, conocidos como colonos nacionales para distinguirlos de los inmigrantes europeos. Por las razones históricas mencionadas, las experiencias de participación en los programas de extensión y manejo forestal gestionados por CONAF, que he podido conocer durante el trabajo en terreno, involucran en su gran mayoría a “colonos nacionales”. En mi investigación pude conocer las experiencias de los residentes de un sector específico, Coilaco Alto, que corresponde a la parte alta del valle homónimo ubicado en la comuna de Pucón (IX región).

Los residentes de Coilaco Alto son, en su gran mayoría, los herederos de agricultores chilenos que establecieron sus hogares en la década del 1920. Se instalaron en este sector inhóspito sin poseer documentaciones, y sólo unos años después pudieron legalizar sus propiedades. Además de reconocer su status de colonos, los residentes se identifican a sí mismos como pequeños agricultores, ya que sus propiedades, que miden entre 30 y 80 hectáreas, caen bajo las definiciones locales de pequeña agricultura. La historia temprana de Coilaco se caracteriza por la deforestación intensa que sirvió para abrir espacios agrícolas, un escenario común en todo el sur del país (Camus y Solari 2008; Otero 2006). Sólo en la década del 1960 los bosques se convirtieron en un recurso económico atractivo. Muchos residentes construyeron sus propios aserraderos o arrendaron sus terrenos forestales a algunas empresas locales. El boom de la silvicultura en Coilaco fue de corta data, ya que la competitividad decreciente causada por la expansión del negocio del agro después de 1970, motivó a la mayoría de los agricultores a regresar a sus actividades económicas habituales (particularmente la ganadería). Aunque la actividad primaria en Coilaco ya no es la silvicultura, la tala de árboles sigue siendo una práctica económica fundamental para producir leña de uso doméstico y, entre los residentes con más tierra, para la comercialización de madera en el mercado local.

Las comprensiones ecológicas locales en Coilaco revelan aspectos generales de lo que podría ser definida como una cosmología colona. Como sucede en la mayoría de los países caracterizados por una historia de expansión colonial (Beinarty Coates 2002; Griffiths y Robin 1997), los discursos sobre el desarrollo y la construcción nacional en Chile se han fusionado tradicionalmente con la celebración de la domesticación de la naturaleza por parte de los colonos. Sin embargo, los discursos nacionalistas no se reflejan automáticamente en las perspectivas históricas de los colonos del presente, para quienes, más que un mito fundacional, la colonización es una lucha continua por retener el control sobre los aspectos simbólicos y físicos de los paisajes locales (véase Morphy 1993). En Coilaco, imágenes del pasado se enfocan en la domesticación de los bosques como el proceso principal mediante el cual la vida humana puede ser mantenida en el tiempo. Un aspecto central en las experiencias del paisaje

y el conocimiento ecológico en este sector son las interacciones entre tipos de espacios forestales definidos mediante dos categorías locales: el “bosque” y la “selva” (a veces referido como “monte”). Mientras que las “selvas” denotan áreas boscosas difícilmente accesibles, que, por ende, se encuentran ubicadas en muchos casos en sectores montañosos, los “bosques” corresponden a aquellas extensiones forestales que son utilizadas y controladas. Un bosque en Coilaco es conceptualizado de forma genitiva (ej. el bosque de los Martínez), y raramente como una categoría general en frases tales como “la belleza del bosque”. La selva, en contraste, es entendida como un sector periférico para los humanos, quienes tienen poco control sobre su crecimiento y regeneración (véase Descola 2013:44). Las experiencias y representaciones del paisaje en Coilaco subrayan la centralidad de la domesticación como un valor pivote dentro de las cosmologías de los colonos (Dominy 2001). Un bosque es apreciado por expresar las capacidades de su dueño en mantenerlo “limpio”, un adjetivo frecuentemente asociado a la palabra “bosque” pero nunca a “selva” (Di Giminiani y Fonck 2015).

Como se observa en otros contextos rurales, las descripciones del paisaje en Coilaco tienden a revelar “*un discurso de moralidad, ya que enfatizan el rol del trabajo duro y la aplicación de conocimiento*” (Lee 2007: 93) en la transformación de tierra improductiva en terrenos agrícolas. Las nociones de historia están íntimamente ligadas a las formas en que las selvas crecen y se retiran (Rival 1993: 648). En particular, la historia corresponde a una continua transformación de selvas en bosques a través de la intervención humana, como a su vez la tendencia contraria, la reconversión de bosques en selvas si los primeros son dejados sin atender por sus dueños. Bajo esta premisa, para los residentes locales la tala no es sólo una actividad económica viable, sino una necesidad, ya que los bosques son espacios inestables y frágiles que tienen que ser extraídos de las selvas a través de un arduo trabajo constante. Una mañana tuve la oportunidad de hablar con Ruby, una vecina que critica abiertamente las posiciones de algunas organizaciones ambientalistas activas en el sector, por su falta de empatía hacia los agricultores locales: “la intervención es necesaria. Sino, ¿cómo sería posible vivir aquí? Todo esto sería selva”. Los comentarios de Ruby reflejan una idea

común entre los residentes de Coilaco, para los que la “intervención” es fundamental a fin de mantener la vida humana en lugares inhóspitos como son los altos valles cordilleranos. Es importante destacar que los residentes están al tanto de los severos riesgos de la deforestación, ya que correlacionan directamente este fenómeno con la disminución del nivel del agua y una mayor incidencia de sequías que ha afectado este sector en las últimas décadas. En última instancia, el control que hay que ejercer sobre los bosques para que no se transformen en “selva” o “monte” no corresponde a un proceso de transformación espacial radical, dado que los bosques son considerados espacios vitales para todo tipo de actividades humanas. “Mantener un bosque limpio” consiste en un conjunto de prácticas de negociación entre la necesidad de domesticación y el riesgo de la deforestación. En este sentido, no debería sorprender que los planes gubernamentales de manejo forestal sean re-contextualizados y adaptados de manera tal que el objetivo de “mantener el bosque limpio” pueda ser logrado.

En mi área de estudio los agricultores generalmente deciden involucrarse en planes de manejo forestal con la esperanza de obtener un *bono* asociado a la implementación del plan y, entre los más optimistas, para maximizar sus actividades extractivas. En terreno, el primer paso en cualquier plan de manejo forestal es que los extensionistas midan la densidad del dosel, determinando la distancia adecuada entre los árboles. Se espera que los agricultores repliquen estas técnicas de medición a fin de identificar los árboles que serán talados. En Coilaco, aunque los propietarios de tierras siguen las pautas de la CONAF en la medición de la estructura del dosel, también realizan raleos de forma consistente con sus estrategias para mantener los bosques “limpios”. Esta actividad no depende de la aplicación de esquemas preconcebidos, sino de un conjunto de respuestas hábiles e improvisadas a los cambios y modificaciones en el medioambiente (Ingold 2000:147; Richards 1993). En particular, “mantener un bosque limpio” requiere una selección constante y contextual de árboles para ser talados y otros para ser preservados según las categorías de árbol “bueno” o “malo”. Los árboles “buenos” son fuentes atractivas de madera para fines constructivos y comerciales, mientras que los “malos” son aquellos destinados a convertirse en madera para calefacción

y otras actividades domésticas. Además de representar un recurso poco atractivo, los árboles “malos” constituyen una amenaza hacia otros árboles, siendo ellos competidores para la obtención de nutrientes. Los árboles “buenos” y “malos” son identificados a través de evaluaciones visuales de sus troncos y follaje. Los árboles “buenos” se caracterizan por sus troncos gruesos y rectos. La presencia de pigmentación en las hojas también puede ayudar a los agricultores a detectar enfermedades que no son visualizadas fácilmente mediante un análisis de la corteza. Al embarcarse en un plan de manejo forestal, los agricultores deben negociar entre sus estrategias contextuales para mantener los bosques “limpios” y las barreras legales de tala establecidas por CONAF.

En el sector de Coilaco se aplica una regla general por la cual solamente se podrían talar aquellos árboles que estén a menos de 4 metros de distancia de otros. Durante una de nuestras conversaciones, Rubén, un residente con experiencias previas en planes de manejo, me explicó que el raleo siempre se presta a modificaciones de varios tipos: “Uno tiene que hacer lo que dice CONAF a la vista. Si veo dos árboles buenos uno al lado del otro, los dejo ahí”. Tal desviación de las normas de gestión forestal es consistente con lo que anteriormente he descrito como “mantener un bosque limpio”. Los residentes de Coilaco explican la desviación de las restricciones legales al uso del bosque, enfatizando en la inviabilidad de los planes de manejo forestal. En particular, una crítica recurrente concierne a la estricta separación impuesta por los planes de manejo forestal entre la fase extractiva y la de conservación (en la cual está prohibida la tala). Dicho marco temporal se halla en clara contradicción con el rol de la tala en la economía doméstica de la sociedad campesina en el sur de Chile. Típicamente, las actividades de tala se concentran al final del verano, cuando la madera es acumulada y secada para ser usada como fuente de calefacción durante el invierno<sup>5</sup>. Sin embargo, la tala no es una actividad predecible, pues generalmente la madera es extraída en respuesta a las necesidades económicas imprevistas. La precariedad económica de la agricultura y el escaso alcance de programas de bienestar social en Chile, transforman a los pequeños agricultores en seres extremadamente vulnerables a eventos inesperados, tales como las enfermedades, o las pérdidas económicas causadas por incendios o

tormentas de nieve. Finalmente, la alternancia entre fases extractivas y no-extractivas establecida por los planes de manejo forestal, contrasta no solamente con la temporalidad inherente a la permanente tarea de mantener los bosques limpios, sino también ante lo impredecible del uso de la tala como respuesta a las restricciones económicas.

Como señalan diversos autores (Agrawal 1995; Cooper 2007; Sillitoe 2010), cualquier dicotomía estricta entre conocimiento ecológico local y conocimiento científico u oficial, está destinada a simplificar las prácticas agrícolas de distintos grupos campesinos. En el sur de Chile, los pequeños agricultores adoptan con entusiasmo muchas de las técnicas introducidas mediante los programas de extensión. Sin embargo, a la hora de implementar los planes de CONAF, los pequeños agricultores desarrollan estrategias de extracción y manejo que no reflejan ni una interiorización acrítica del conocimiento oficial, ni tampoco una resistencia en defensa de prácticas y nociones locales. En última instancia, los procesos institucionales de transferencia de conocimiento oficial aparecen como altamente heterogéneos y contradictorios. Esto, empero, no significa que los programas de transferencia simplemente no logren ejercer ningún tipo de influencia respecto a los usos y conocimientos locales de los recursos forestales. La circulación de conocimiento oficial está estrictamente relacionada con la implementación de mecanismos mediante los cuales las actividades de los agricultores se vuelven legibles para los organismos estatales y, por lo tanto, controlables. Como indica Nadasdy, “la aplicación del conocimiento medioambiental, como una actividad social y profundamente política, simplemente no puede distinguirse de la actividad social que constituye su producción y circulación” (2011: 129). Durante el trabajo de campo, capté que para los residentes locales la participación en los programas de extensión y manejo forestal representa un dilema: por un lado, se pueden obtener beneficios económicos; por otro, al involucrarse con CONAF los residentes se vuelven más vulnerables al monitoreo. A pesar de que los funcionarios forestales son vistos raramente en los sectores rurales, debido a la escasez de personal, la posibilidad de ser monitoreado respecto a las actividades de tala representa una constante fuente de ansiedad entre los pequeños agricultores<sup>6</sup>.

Efectivamente, una vez que un agricultor suscribe un plan de manejo forestal, todas sus actividades pueden ser fiscalizadas en cualquier momento durante varios meses. Esta es la razón principal por la cual muchos agricultores son reacios a participar en programas de la CONAF. Las ansiedades e incertidumbres sobre la fiscalización se agravan aún más por la amenaza constante de denuncias anónimas por parte de vecinos. Cada vez que un agricultor es multado por CONAF, las sospechas se levantan sobre los residentes cercanos acusados de ser envidiosos. En mi área de estudio, la “envidia” es sentimiento latente, y una fuente potencial de hostilidad entre residentes locales. Tales sentimientos afloran rápidamente cuando alguien es considerado particularmente exitoso en sus actividades agrícolas.

En Coilaco, la preocupación causada por participar en planes de manejo forestal refleja algunos dilemas acerca de la naturaleza potencialmente exclusiva de las legislaciones ambientales. En general, las regulaciones forestales pueden provocar un alejamiento gradual de los habitantes del bosque de los planes forestales estatales hacia alternativas definidas como ilegales por el Estado (Peluso 1994: 235). Cualquier extracción de madera llevada a cabo sin autorización de la CONAF califica técnicamente como tala ilegal. Por lo tanto, se considera como la tala ilegal desde la venta de madera en el mercado negro hasta las talas de árboles para uso doméstico. A pesar de que en Coilaco esta actividad se limita principalmente a pequeñas infracciones y desviaciones de las normas de CONAF, los residentes locales ven este tema en términos contradictorios. Por un lado, consideran la persecución en contra de la tala ilegal como una medida necesaria para prevenir la deforestación y el empobrecimiento del suelo, especialmente cuando estas actividades son llevadas a cabo por grandes terratenientes (*los grandes*). Por otra parte, la tala ilegal es vista como un hecho inevitable entre los pequeños propietarios, ya que seguir las disposiciones vigentes de CONAF al pie de la letra es sencillamente imposible para ellos. Este es el caso de las ampliamente criticadas normas de re-plantación. En mi área de estudio, los permisos de tala siguen el principio general de una proporción de cinco a uno: por cada árbol talado, cinco árboles de la misma especie deben ser plantados. Sin embargo, los árboles nativos jóvenes no solo no se hallan disponibles en el mercado local, sino que una vez

plantados deben ser protegidos del ganado mediante la construcción de costosos cercos de madera y alambres de púas. Dado que la replantación es una actividad difícilmente viable, los residentes han desarrollado sus propias estrategias para ocultar la tala de la vista de los oficiales. Como una vez me explicó un agricultor, mantener la apariencia del bosque es esencial para evitar costosas multas: “Lo único que podemos hacer es cortar los árboles en el monte, en las partes donde es más difícil llegar”.

El análisis etnográfico de las prácticas forestales en Coilaco indica que las estrategias de evasión de las normas son necesarias para asegurar la permanencia de la pequeña silvicultura. Los agricultores que he conocido en este estudio consideran la fiscalización de sus actividades forestales injusta y excesivamente dura para los pequeños propietarios, en comparación con los beneficios que gozan los grandes terratenientes. Durante el trabajo de campo, a menudo se me ofrecieron ejemplos de la disparidad entre el trato de las instituciones agrícolas hacia los pequeños propietarios (*los pequeños*) y hacia los grandes terratenientes, los cuales podrían fácilmente conseguir permisos de tala para grandes extensiones de terrenos forestales e ingentes subsidios para las actividades de manejo y conservación.

En última instancia, los residentes de Coilaco interpretan tales diferencias como ejemplo del desinterés del Estado en su futuro, el cual se encuentra amenazado por la decreciente competitividad comercial y la emigración. Los pequeños productores en Chile ven al Estado como una fuente vital de subsidios, planes de crédito, y lo más importante, “proyectos”, un término omnipresente en todo el país, para contrarrestar la precariedad de la silvicultura a pequeña escala. Un “proyecto” no sólo es una fuente inmediata de fondos, también alimenta expectativas de embarcarse en trayectorias exitosas de autorrealización. Las promesas de autonomía, no obstante, contrastan con una realidad caracterizada por una constante dependencia de “proyectos” que son patrocinados por funcionarios y políticos locales. Estas experiencias frustrantes de promesas de independencia y relaciones clientelares de dependencia, producen una imagen del Estado entre los pequeños agricultores centrada en una contradicción no resuelta. El Estado monopoliza la esperanza de

contrarrestar el aumento de la precariedad entre los agricultores que, a su vez, es percibido como un obstáculo para la permanente lucha por la resiliencia de la agricultura de pequeña escala. Finalmente, esta particular imagen del Estado no se puede considerar un producto general de la acción estatal, sino que es el resultado de una particular forma de gobernar —el neoliberalismo— en la cual el Estado no desaparece, sino que es refundado mediante lógicas financieras de *accountability* e individualización.

## SUJETOS AMBIENTALES Y ARTES DE GOBERNAR EN LA CULTURA NEOLIBERAL

Recurriendo a literatura sobre la gobernanza ecológica y las aproximaciones foucaultianas al poder/conocimiento (Agrawal 2005; Brosius 1999; Mathews 2005; Peluso 1994; Tsing 2005), he tratado de demostrar las posibles materializaciones en terreno de los sujetos medioambientales ideales que los programas de extensión y transferencia presuponen. Detrás de lo que parece ser una transferencia neutral de experticia, yacen estrategias de gobierno diseñadas para introducir mecanismos de monitoreo y control inspirados por los principios de responsabilidad individual. El análisis etnográfico presentado ha demostrado, de esta manera, que lejos de ser procesos neutrales de transferencia de conocimiento, la extensión y los programas de gestión de recursos naturales engendran estrategias de monitoreo tanto de los actores estatales como de las actividades de los agricultores. Esta tesis levanta algunas preguntas significativas sobre la intersección entre poder y conocimiento en juego en las formas neoliberales de gobernanza medioambiental. A partir de los escritos de Foucault sobre la formación del sujeto (1982, 2002), diversos autores han definido el papel histórico de las instituciones ambientales a través de un énfasis en su capacidad moldear el comportamiento de grupos humanos heterogéneos, de manera consistente con los discursos sobre política y medio ambiente a cuya consolidación ellos mismos han contribuido (Dove y Carpenter 2008: 48-49). Para Foucault, el sujeto es una función del discurso y, por lo tanto, puede ser aprehendido a través de un análisis genealógico de las condiciones epistémicas que hacen a un sujeto legítimo en un período histórico dado. En lugar de establecer definiciones vinculantes de lo que es un

sujeto en contextos sociales e históricos específicos, Foucault está interesado en el análisis empírico de “los modos de objetivación que transforman a los seres humanos en sujetos” (1982: 777). La acción institucional sobre el uso de los recursos naturales es un ejemplo acertado de los modos de objetivación de Foucault. Según lo propuesto por Agrawal, las tecnologías de gobernanza en silvicultura producen, en última instancia, “comunidades reguladoras” –donde nuevas interacciones sociales que involucran al medioambiente toman forma– y “sujetos medioambientales” –gente que piensa y actúa de nuevas maneras en relación con la gobernanza del bosque (2005: 6).

Mi argumentación presenta un escenario que no corresponde a narrativas unívocas de formación de sujetos. El análisis etnográfico presentado ha demostrado que la gobernanza medioambiental no da como resultado la formación de un tipo ideal de sujeto medioambiental, en este caso supuestamente caracterizado por su preocupación por la conservación y habilidades de gestión aplicadas a la comercialización de madera. Una aproximación al proceso de formación del sujeto que ignora las contradicciones y resistencias de este fenómeno corre el riesgo de sobrestimar la coherencia del conocimiento oficial, que, como se ha visto a lo largo de este artículo, más bien aparece como un conjunto de prácticas heterogéneas de gobernanza. Sin embargo, mi conclusión no debe interpretarse como un intento de subestimar las consecuencias profundas de aquellas prácticas de gobierno caracterizadas por la transferencia de conocimiento. El propio Foucault destacó la necesidad de aproximarse a la formación del sujeto como un proceso que no necesariamente resulta en la institución uniforme e ineludible de sujetos históricos (1982). Una aproximación empírica a la formación del sujeto requiere una atención a la resistencia y a las contradicciones generadas por la objetivación: “En lugar de analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, consiste en analizar las relaciones de poder a través del antagonismo de las estrategias” (Foucault 1982: 780). Siguiendo la invitación de Foucault a analizar modos de objetivación a través de los antagonismos que provocan, he propuesto que la formación del sujeto en la gobernanza medioambiental, tiene un impacto penetrante en la vida social porque impone condiciones de autorrealización hacia las cuales tanto

los receptores como los implementadores de la acción institucional deben adaptarse creativamente. En el caso de los programas de manejo de recursos naturales, he planteado que dichas condiciones de autorrealización son indisociables de estrategias concretas de monitoreo y legibilidad, articuladas mediante una presión hacia la responsabilidad individual y la auto-disciplina, un punto que puede extenderse a cualquier forma de acción institucional caracterizada por el modelo de la auditoría.

Los programas de transferencia agrícola descritos en este artículo, están ideados en torno a un tipo de sujeto entendido como un proyecto empresarial caracterizado por una propensión a la reflexividad para la auto-superación (Foucault 2008; Gershon 2011). En la práctica, dicho sujeto presupone su control, no mediante una autoridad directa, sino a través de mecanismos de control que enfatizan la responsabilidad individual, la transparencia y la auto-disciplina. El análisis de gobernanza ambiental presentado en este artículo, es ilustrativo del imaginario del Estado bajo el neoliberalismo, que viene a ser percibido como un lugar tanto de esperanza de autorrealización como de aprensión por la precariedad económica que caracteriza la producción tardo-capitalista. El neoliberalismo no consiste en una falta de control estatal, sino en una forma particular de gobernanza basada en la introducción de lógicas de mercado en la acción estatal, como también de un rol decisivo del Estado para facilitar la acumulación capitalista (Goodale y Postero 2013: 8). Los sistemas de control estatal descritos en este artículo constituyen una solución gubernamental para la reestructuración neoliberal de la intervención estatal, que pretende favorecer la inclusión de los pequeños propietarios en el mercado global de acuerdo con el principio de la responsabilidad individual. En última instancia, la gobernanza ambiental bajo el neoliberalismo no constituye simplemente una expansión del mercado mediante la privatización de recursos naturales. A esta cara visible del neoliberalismo corresponde una menos evidente, cuya importancia he tratado de demostrar en mi investigación. Tras una acción institucional que pretende contrarrestar una creciente marginalización económica, se esconde el intento de incluir en el mercado aquellas formas de vida que no están organizadas en base a racionalidades financieras (Povinelli 2011). Dicha inclusión no se da

simplemente por una aceptación incondicional y acrítica de esquemas socio-económicos ajenos por parte de distintos actores sociales, sino que requiere de un modelo de poder donde el auto-control sea también el arte de gobernar.

## CONCLUSION

Basado en la observación etnográfica de la relación entre pequeños agricultores y funcionarios estatales que participan de programas de manejo forestal, este artículo ha demostrado el rol fundamental, y a la vez poco visible, del control en la gobernanza neoliberal. La aplicación de los principios neoliberales de autorrealización, control y libertad están rigurosamente entrelazados. La paradoja es que la libertad puede ser producida por técnicas de control y no simplemente ser equilibrada, como en el caso de los efectos de los sistemas de auditoría bajo los cuales actúan funcionarios ambientales y campesinos. La mutualidad de libertad y control en la gobernanza neoliberal produce un nuevo modo de dominación que entrega técnicas avanzadas de control mediante la libertad misma (Comaroff y Comaroff 2009: 51). Las acciones institucionales de transferencia de conocimiento ambiental oficial analizadas en este estudio generan prácticas de monitoreo y control, mediante las cuales tanto el conocimiento ambiental local como las acciones de los actores estatales se ven marginalizados a favor de la implementación de modelos legales para el uso de recursos naturales. En última instancia, la aplicación de un modelo de conocimiento oficial basado en los mecanismos de auditoría justifica la consecuente contracción financiera e ideológica de las políticas sociales colectivas, de tal modo que reduce ideológicamente el carácter colectivo y político de la marginalización económica de los pequeños propietarios a un problema de responsabilidad individual.

**Agradecimientos:** Agradezco a mis colegas y colaboradores de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, Daniela Jacob, Marisol Verdugo, Matías Gonzáles, Martín Fonck y Julián Moraga. A Francisca de la Maza, Campus Villarrica UC, a los funcionarios de CONAF que amablemente accedieron a ser entrevistados y, sobre todo, a los vecinos de Coilaco por compartir

generosamente sus experiencias. Esta investigación fue financiada por el Fondo de Investigación Concurso Puente 2014 de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y por el Centro CIIR (CONICYT / FONDAP / 15110006). Versiones anteriores de este artículo fueron presentadas en la conferencia LASA del año 2013 en Washington (EE.UU.), y en el seminario de investigación del programa de Antropología UC. Agradezco a Nancy Postero, Jorge Montesinos, Paula Saravia, Helene Risor y Manuel Prieto por sus comentarios durante ese evento. También quiero expresar mis agradecimientos al editor invitado de este número: Marcelo González Gálvez.

## NOTAS

- <sup>1</sup> A comienzos de la década de 1980, la industria silvicultora estaba en manos de tres grupos económicos (Cruzat-Larraín, Matte-Alessandri y Vial). Los tres, en su conjunto, eran dueños del 75% de las plantaciones, el 78% de la producción industrial y el 73% de las exportaciones. Recibían, además, el 85% de los subsidios estatales (Klubock 2004).
- <sup>2</sup> El 2005, el 38% de la tierra reforestada a través del decreto de ley 701 pertenecía a pequeños propietarios dueños de menos de 100 hectáreas, mientras que el resto era asignado a propietarios de mediana y gran escala.
- <sup>3</sup> La misión de la CONAF está disponible en [www.conaf.cl](http://www.conaf.cl).
- <sup>4</sup> Los nombres de las personas involucradas en este estudio fueron cambiados para asegurar su privacidad.
- <sup>5</sup> En este sector, no existe una división estricta de género en las actividades de tala. Sin embargo, las actividades forestales son llevadas a cabo típicamente por hombres.
- <sup>6</sup> En el momento de mi trabajo de campo, nueve oficiales de extensión se encontraban activos en la Araucanía, una región con alrededor de 900.000 habitantes.

## BIBLIOGRAFÍA

- Agrawal, A.** 1995. "Dismantling the divide between indigenous and scientific knowledge". *Development and Change* 26 (3): 413-39.
- 2005. *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*. Duke University Press, Durham.
- Beinart, W. y P. Coates.** 2002. *Environment and History: The Taming of Nature in the USA and South Africa*. Routledge, London.
- Bengoa, J.** 2014. *Mapuche, Colonos y el Estado Nacional*. Editorial Catalonia, Santiago.
- Brosius, J.** 1999. "Green dots, pink hearts: displacing politics in the Malaysian Rainforest." *American Anthropologist* 101 (1): 36-57.
- Campbell, B.** 2005. "Changing protection policies and ethnographies of environmental engagement". *Conservation and Society* 3 (2): 280.

**Camus, P.** 2006. *Ambiente, Bosques y Gestión Forestal en Chile, 1541-2005*. LOM Ediciones, Santiago.

**Camus P., y M. Solari.** 2008. "La invención de la selva austral: Bosques y tierras despejadas en la cuenca del río Valdivia (siglos XVI-XIX)." *Revista de Geografía Norte Grande* 40: 5-22.

**Cárcamo-Huechante, L.** 2006. "Milton Friedman: Knowledge, Public Culture, and Market Economy in the Chile of Pinochet." *Public Culture* 18 (2): 413-35.

**Clapp, R.** 1995. "Creating Competitive Advantage: Forest Policy as Industrial Policy in Chile." *Economic Geography* 71 (3):273-96.

---- 1998. "Waiting for the forest law: resource-led development and environmental politics in Chile." *Latin American Research Review* 33 (2) :3-37.

**Comaroff, J. L. y J.Comaroff.**2009. *Ethnicity, Inc.* University of Chicago Press, Chicago.

**Cooper, A.** 2007. *Inventing the Indigenous: Local Knowledge and Natural History in Early Modern Europe*. Cambridge University Press, Cambridge.

**Correa, M., R. Molina y N. Yáñez.** 2005. *La Reforma Agraria y la Tierra Mapuche: Chile 1962-1975*. LOM Ediciones, Santiago.

**Descola, P.** 2013. *Beyond Nature and Culture*. Chicago University Press, Chicago.

**Di Giminiani, P.** 2013. "The contested rewe: sacred sites, misunderstandings and ontological pluralism in Mapuche land negotiations". *Journal of Royal Anthropological Institute* 19 (2): 527-554.

---- 2015a. "Being from the land: memory, self and the power of place in indigenous Southern Chile". *Ethnos*. DOI: 10.1080/00141844.2015.1028566.

---- 2015b. "The becoming of ancestral land: place and property in Mapuche land claims". *American Ethnologist* 42 (3): 490-503.

**Di Giminiani y M. Fonck.** 2015. "El paisaje como proceso de vida: experiencias de domesticación del bosque en el sur de Chile". *Revista de Geografía Norte Grande* 61: 7-24.

**Dominy, M.** 2001. *Calling the Station Home: Place and Identity in New Zealand's High Country*. Rowman and Littlefield, Lanham.

**Dove, M., y C. Carpenter.** 2008. "Major Historical Currents in Environmental Anthropology." En *Environmental anthropology: a historical reader*, editado por M. R. Dove and C. Carpenter, Pp. 1-85. Blackwell Publishing, Malden.

**Ferguson, J.** 2010. "The uses of neoliberalism." *Antipode* 41(1):166-84.

**Foucault, M.** 1982. "The subject and power." *Critical inquiry* 8 (4): 777-95.

---- 2002. *The Archaeology of Knowledge*. Routledge, London.

---- 2008. *The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-1979*. Palgrave Macmillan, London.

**Gershon, I.** 2011. "Neoliberal agency." *Current Anthropology* 52 (4): 537-55.

**Gledhill, J.** 2004. "Neoliberalism." En *A companion to the anthropology of politics*, editado por D.Nugent y J.Vincent, Pp. 332-348. Wiley-Blackwell, Oxford.

**Goodale, M. y N. Postero.** 2013. "Revolution and retrenchment: Illuminating the present in Latin America". En

*Neoliberalism, interrupted: social change and contested governance in contemporary Latin America*, editado por M. Goodale y N. Postero , Pp. 1-22. Stanford: Stanford University Press.

**Griffiths, T. y L. Robin** (eds.). 1997. *Ecology and Empire: Environmental History of Settler Societies*. Washington: University of Washington Press.

**Gupta, A.** 1995. "Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state." *American Ethnologist* 22 (2): 375-402.

**Gwynne, R. y J. Ortiz.** 1997. Export growth and development in poor rural regions: A meso-scale analysis of the Upper Limari." *Bulletin of Latin American Research* 16 (1): 25-41.

**Harvey, D.** 2007. *A brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press, Oxford.

**Henne, A., y T. Gabrielson.** 2012. "Chile is timber country." En *Environment and citizenship in Latin America: Natures, subjects and struggles*, editado por A. Lattay H.Wittman, Pp. 101-49. Berghahn Books, London.

**Hilgers, M.** 2011. "The three anthropological approaches to neoliberalism". *International Social Science Journal* 61:351-64.

**Ingold, T.** 2000. *The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill*. Routledge, London.

**Kay, C.** 2002. "Chile's neoliberal agrarian transformation and the peasantry". *Journal of Agrarian Change* 2 (4): 464-501.

**Kipnis, A.** 2008. "Audit cultures: neoliberal governmentality, socialist legacy, or technologies of governing?" *American Ethnologist* 35:275-89.

**Klubock, T.** 2004. "Labor, land, and environmental change in the forestry sector in Chile, 1973-1998." En *Victims of the Chilean miracle: workers and neoliberalism in the Pinochet era, 1973-2002*, editado por P.Winn, Pp. 337-87. Duke University Press, Durham.

---- 2014. *La Frontera: Forests and Ecological Conflict in Chile's Frontier Territory*. Duke University Press, Durham.

**Lee, J.** 2007. "Experiencing landscape: Orkney hill land and farming." *Journal of Rural Studies* 23 (1): 88-100.

**Mathews, A.** 2005. "Power/knowledge, power/ignorance: forest fires and the state in Mexico." *Human Ecology* 33 (6): 795-820.

---- 2008. "State making, knowledge, and ignorance: translation and concealment in Mexican forestry institutions." *American Anthropologist* 110 (4): 484-94.

---- 2011. *Instituting Nature: Authority, Expertise, and Power in Mexican Forests*. MIT Press, Cambridge.

**Morphy, H.** 1993. "Colonialism, history and the construction of place: the politics of landscape in Northern Australia." En *Landscape: politics and perspectives*, editado por B. Bender, Pp. 205-43. Berg, Providence.

**Nadasdy, P.** 2011. "Application of environmental knowledge: the politics of constructing society/nature." En *Knowing nature: conversations at the intersection of political ecology and science studies*, editado por M. Goldman, P.Nadasdy, y M.Turner, Pp. 129-133. University of Chicago Press, Chicago.

**Neira, E. y E. Rivas.**2013. "Evaluación del fondo de conservación, recuperación y manejo sustentable del bosque nativo (Ley N°20.283)." *Bosque Nativo* 52: 26-28.

**Ong, A.** 2006. *Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty*. Duke University Press, Durham.

**Otero, L.** 2006. *La Huella del Fuego: Historia de los Bosques Nativos, Poblamiento y Cambios en el Paisaje del Sur de Chile*. Pehuén, Santiago.

**Pauchard, A., y P. Villarroel.** 2002. "Protected areas in Chile: history, current status and challenges." *Natural Areas Journal* 22: 318-30.

**Peluso, N.** 1994. *Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*. University of California Press, Berkeley.

**Power, M.** 1997. *The Audit Society: Rituals of Verification*. Oxford University Press, Oxford.

**Povinelli, E.** 2011. *Economies of Abandonment: Social Belonging and Endurance in Late Liberalism*. Duke University Press, Durham.

**Richards, P.** 1993. "Cultivation: knowledge or performance." En *An anthropological critique of development: the growth of ignorance*, editado por M. Holbart, Pp. 61-78. Routledge, London.

**Rival, L.** 1993. "The growth of family trees: understanding huarani perceptions of the forest." *Man* 28 (4): 635-52.

**Rose, N.** 2006. "Governing 'advanced' liberal democracies," En *The anthropology of the state: a reader*, editado por A. Sharma y A. Gupta, Pp. 144-68. Blackwell Publishing, Oxford.

**Scott, J.** 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. Yale University Press, New Haven.

**Sillitoe, P.** 2010. "Trust in development: some implications of knowing in indigenous knowledge." *Journal of the Royal Anthropological Institute* 16:12-30.

**Silva, P.** 1991. "Technocrats and politics in Chile: from the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks." *Journal of Latin American Studies* 23 (2): 385-410.

**Silva, E.** 1997. "The politics of sustainable development: native forest policy in Chile, Venezuela, Costa Rica and Mexico." *Journal of Latin American Studies* 29 (2): 457-93.

**Strathern, M.** (ed.). 2000. *Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics and the Academy*. Routledge, London.

**Tecklin, D., C. Bauer, y M. Prieto.** 2011. "Making environmental law for the market: the emergence, character, and implications of Chile's environmental regime." *Environmental Politics* 20 (6): 879-98.

**Tsing, A.** 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton University Press, Princeton.